



REVISION No. 6655/1a./56
FELIPA DOMINGUEZ,
Proyecto del C. Ministro
Octavio Mendoza González.
Srío. Lic. José Orozco Lomelín.

México, Distrito Federal.-- Acuerdo de la Segunda Sala
correspondiente al día siete de junio de mil novecientos -
cincuenta y siete.

VISTOS; y
RESULTANDO.

PRIMERO.-- En escrito presentado el 13 de agosto de
1956 ante el Juez Segundo de Distrito del Distrito Federal,
en Materia Administrativa, Felipa Domínguez, por derecho -
propio, pidió amparo contra las autoridades y por los actos

que precisó como sigue: "C. Director de Gobernación del De-
partamento del D. F.: Las órdenes dictadas para que se cance-

le definitivamente la licencia de funcionamiento del caba-
ret de segunda clase de mi propiedad, ubicado en la esqui-
na de las calles de [redacted] número [redacted] y [redacted]

[redacted] de esta Ciudad, y sus efectos y consecuencias para im-
pedir el funcionamiento del propio negocio y su cierre defi-

nitivo. C. Jefe de la Oficina de Licencias del mismo Depar-
tamento: La ejecución de las órdenes anteriores, y los acuer-
dos para que se efectúe la cancelación de esa licencia, se-

recoja y retire del negocio. C. Jefe del Departamento del -
D. F., su intervención en las órdenes y acuerdos mencionados,
y su ejecución."

SEGUNDO.-- El Juez admitió la demanda, y en su oportuni-
dad resolvió sobreseer en parte, y en otra amparar a la que
se solicita con apoyo en las consideraciones que, en lo conducente,

PRIMERO.-- El acto reclamado consistente en la cance-
lación definitiva de la licencia de funcionamiento del caba-
ret de segunda clase, ubicado en la esquina de las calles de

[redacted] No. [redacted] y [redacted] de esta Ciudad, efectos
y consecuencias que se reclama del C. Jefe de la Oficina de

Licencias del Departamento del Distrito Federal, es cierto, pues dicha autoridad lo confiesa en su informe justificado.--

SEGUNDO.- Los demás actos que se reclaman de las restantes autoridades señaladas como responsables, no son ciertos, por haberlos negado en su informe justificado, sin que exista -- prueba en contrario, el juicio debe sobreseerse respecto de tales actos, con apoyo en el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo.-

TERCERO.- Las autoridades responsables estiman que el juicio es improcedente en los términos de los artículos 73 fracción XII y 74 fracción III de la Ley de Amparo, porque la cancelación se efectuó el dieciséis de marzo del presente año, y que habiéndose promovido el juicio, hasta el diez de agosto próximo pasado, no se impugnó el acto reclamado durante los plazos a que aluden los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo.- La anterior causal de improcedencia es infundada y debe desecharse. En efecto, si bien es cierto que las responsables remitieron como anexo de su informe copia certificada del acuerdo de cancelación de veintiséis de marzo del año en curso, omitieron enviar a estos autos constancia de que la quejosa hubiera tenido conocimiento de la cancelación, precisamente el veintiséis de marzo del año en curso (no dieciséis de marzo, como se dice en el informe) de la cancelación de su licencia, de su establecimiento Comercial. Por lo tanto, por falta de justificación de la causal de improcedencia propuesta, debe desecharse y entrar se al estudio del fondo de la cuestión planteada..."

QUINTO.- El anterior concepto de violación es fundado. En efecto, la autoridad responsable para dictar la cancelación de la licencia de la negociación de la quejosa se fundó en el artículo 22 del Reglamento para Cafés-Cantantes o Cabarets y Salones de Baile, porque el C. Director General de Gobernación del Departamento del D. F., ordenó la clausura de dicho giro; por su parte la quejosa objeta el acta de clausura de nueve de di-



ciembre de mil novecientos cincuenta y cinco, que las responsables remitieron como anexo de su informe, porque dicha acta no reúne los requisitos que señala el artículo 16 -- Constitucional, esto es, no se refieren a los elementos que deben contener las visitas domiciliarias y que deben ser en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar visitado, y en el caso, el acta no se encuentra firmada por los testigos de asistencia y consecuentemente le faltan los requisitos a que alude el artículo 16 Constitucional. -- Ahora bien, en el acta objetada, que obra en estos autos como anexo del informe, no aparece que contenga el sello oficial que acredite su autenticidad, con los nombres de las personas que figuraron como testigos ni sus firmas. -- En consecuencia, no llenando el documento, que se rindió como -- prueba por las autoridades con motivo de la clausura del establecimiento de la quejosa los requisitos establecidos por el artículo 16 Constitucional, ni con lo establecido -- por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis sustentada al resolver el Toca número 4498/54, y ante la falta de justificación y motivación del informe que ha rendido las responsables, debe concluirse que no está legalmente demostrado que estuviera clausurado, y al haberse fundado precisamente el acuerdo que constituye la materia de este juicio en tal circunstancia para aplicar el artículo 22 del Reglamento de Cafés-Cantantes, y Salones de Baile, para decretar la cancelación de la licencia del establecimiento de la quejosa hizo una aplicación inexacta de tal -- precepto, constituyendo una violación a los artículos 14 y -- 16 Constitucionales en perjuicio de la agraviada. Por lo tanto, procede conceder el amparo solicitado."

TERCERO.- Inconforme el Jefe de la Oficina de Licencias del Departamento del Distrito Federal, interpuso revisión, -- que fue admitida con fecha 21 de noviembre de 1956. El 28 --

de febrero de 1957 se notificó el acuerdo que mandó turnar los autos al ponente. El Agente del Ministerio Público Federal que intervino pidió que se sobresea el juicio.

C O N S I D E R A N D O .

Manifiesta la autoridad recurrente: 1) Que el fallo - viola el artículo 74, fracción III, en relación con el 73 - fracción XII, de la Ley de Amparo, al sostener que es infundada la causa de improcedencia invocada por las responsables, con apoyo en que éstas no demostraron que la cancelación de la licencia se hubiere dado a conocer a la quejosa en el mismo mes de marzo de 1956; que es erróneo el razonamiento del Juez, porque con las pruebas aportadas con el informe justificado se demostró que la clausura del cabaret se llevó a efecto desde noviembre de 1955; y que como la cancelación de la licencia no es más que una consecuencia lógica de la clausura definitiva, se trata en el caso de un acto derivado de otro con-sentido; por lo que debió ser sobreseído el juicio.- 2) Que el fallo es también violatorio del artículo 22 del Reglamento de Cafés Cantantes o Cabarets y Salones de Bailes, precepto que establece que las licencias de funcionamiento - que se otorgan a cabarets, como el de la quejosa, no constituyen en favor del interesado un derecho absoluto, y pueden ser revocadas, canceladas o nulificadas por la autoridad, cuando así lo exija el interés público. Que en el caso, la recurrente demostró, con las copias certificadas que remitió con el informe, que el funcionamiento del cabaret de la quejosa era notoriamente lesivo a la moral y que habiendo interés general en que no continuase en vigor una licencia que no tiene razón de ser, tanto más cuando que se encontraba clausurado el establecimiento, al decretar la cancelación de dicha licencia se hizo con apoyo en el mencionado artículo 22; por lo cual el Juez debió negar la protección solicitada.

Es ineficaz el primer agravio, en que se sostiene que la cancelación de la licencia no es más que consecuencia de



la clausura del establecimiento, en virtud de que el Juez sostiene en su sentencia que no está legalmente demostrada dicha clausura, en atención a que el acta relativa, -- objetada por la quejosa, carece de multitud de requisitos legales. En consecuencia, y como en los agravios no se -- impugnan estos razonamientos del Juez, rigen la sentencia y obligan a desestimar el agravio, el cual presupone la -- validez de un acto que el Juez no considera demostrado.

Y es también ineficaz el segundo agravio, toda vez -- que, si bien las autoridades tienen las facultades a que -- se contrae el artículo 22 del Reglamento citado, en el -- caso, según aparece del documento relativo, que obra a -- fojas 10 vuelta de auto, y según lo advierte el juzgador -- la cancelación de la licencia se apoya sólo en la cir -- cunstancia de que el cabaret en cuestión había sido clau -- surado; clausura que, como se dice en el párrafo anterior, -- no quedó demostrada en opinión del sentenciador, sin que -- la recurrente desvirtuara las razones invocadas en el fa -- llo en la parte relativa; por lo que procede concluir, -- con el Juez, que la responsable hizo una aplicación ine -- xacta del precepto de referencia, lo que constituye una -- violación de garantías en perjuicio de la quejosa.

En atención a lo expuesto y a que los agravios invo -- cados por la autoridad recurrente no desvirtúan la consi -- deración fundamental en que se apoya el Juez para conce -- der la protección, esta Sala se ve obligada a confirmar el -- el fallo a revisión, en la parte recurrida; por lo que se -- resuelve:

PRIMERO.- Se confirma la sentencia a revisión, en la -- parte recurrida.

SEGUNDO.- Se sobresee este juicio de garantías en -- los términos del punto primero resolutivo de la misma -- sentencia.

TERCERO.- La Justicia de la Unión ampara y protege --

a Felipe Domínguez contra el acto que reclama del Jefe de la Oficina de Licencias, consistente en la cancelación definitiva de la licencia de funcionamiento del cabaret propiedad de la quejosa.

CUARTO.- Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelven los autos al Juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese este tomo.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de tres votos, contra el señor Ministro Felipe Tena Ramírez, habiendo sido-relator el señor Ministro Octavio Mendoza González.

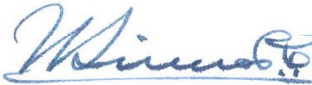
Ausente el señor Ministro Franco Carreño.

Firman los señores Presidente y Ministros que intervinieron con el Secretario que autoriza.

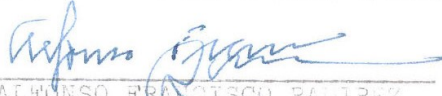
EL PRESIDENTE ACCIDENTAL.


OCTAVIO MENDOZA GONZÁLEZ.

LOS MINISTROS:


JOSE RIVERA PEREZ CALPOS.


FELIPE TENA RAMÍREZ.


ALFONSO FRANCISCO RAMÍREZ.

EL SECRETARIO.


Antonio Rojas Pérez Palacios.

En 8-AGO 1958 por lista de la misma fecha, se notificó la resolución anterior a los interesados y al Ministerio Público Federal.

